

El sector agroalimentario, un asunto de interés general

En situaciones límite es cuando se comprueba la capacidad de resistencia y adaptación, y también la de las instituciones sociales y económicas. Eso es lo que viene ocurriendo con el sector agroalimentario que, desde el inicio de la pandemia COVID-19, está sometido a una importante prueba de esfuerzo, en la que está demostrando capacidad suficiente para responder a las demandas de la sociedad y para adaptarse a las situaciones provocadas por la reducción de la movilidad de los ciudadanos.

La sociedad española se ha dado cuenta de que, en situaciones de cierre de fronteras como ha ocurrido durante la pandemia, disponer de un sector agroalimentario eficiente en términos productivos y bien organizado es la mejor garantía para abastecernos de alimentos sanos, de calidad y a precios razonables.

Esto no significa negar la importancia del comercio internacional, sino ser conscientes de que no se puede dejar en exclusiva a los mercados globales la satisfacción de nuestras necesidades básicas, como es la alimentación. Sólo con un buen equilibrio entre el mercado interno (local, regional y nacional) y el mercado exterior se puede lograr el abastecimiento alimentario en cantidad y calidad suficientes.

Además de haber comprobado la importancia estratégica de nuestro sector agroalimentario y del reto logístico que supone tener abastecidos todos los días las tiendas y supermercados, nos hemos interesado también por sus problemas, que no son pocos.

Por primera vez en muchos años, los temas relacionados con la producción de alimentos han ocupado los diarios y los espacios *prime time* de las emisoras de radio y los canales de TV. A través de los medios de comunicación, los agricultores se han sentado en la mesa de los hogares contando el esfuerzo que hay

detrás de las hortalizas que componen nuestras ensaladas o de los cereales con los que se fabrica el pan y hacemos sabrosas paellas; también las dificultades para criar el ganado vacuno, bovino o avícola, que nos permite poder cocinar un buen filete de carne o disponer de huevos y leche en nuestra dieta.

Hemos sabido que, detrás de todos esos alimentos, hay un sistema articulado de producción, transformación, comercio, transporte y distribución, que forman lo que se denomina la "cadena alimentaria" y de cuyo buen funcionamiento depende la seguridad en materia de abastecimiento de alimentos.



Pero para que funcione la cadena alimentaria es necesario que los distintos eslabones que la componen sean eficientes, tanto internamente, como en las relaciones entre ellos. Por ejemplo, el sector de la producción tiene que ser eficiente en la gestión de las explotaciones agrarias, de tal forma que los agricultores produzcan con estándares de calidad y salubridad las materias primas que han de ser transformadas por las industrias, o bien destinadas en fresco al envasado y su posterior exposición y venta en las tiendas y supermercados.

Para eso se necesita que su producción sea bien remunerada en el mercado, cosa que cada vez resulta más difícil, debido a la fuerte competencia provocada por

la apertura de las relaciones comerciales. Sólo mediante una reducción de los costes productivos, una mejor organización cooperativa para concentrar la oferta y poder negociar los precios, o la apuesta por productos más diferenciados y de más valor añadido, puede el sector de la producción hacer frente a la posición más débil que, por razones estructurales, suele ocupar en la cadena alimentaria. Si no es así, difícilmente puede lograrse un equilibrio dentro de la cadena, y su funcionamiento dejará de ser eficiente.

Los temas relacionados con la producción de alimentos traspasan los límites del propio sector para convertirse en un asunto de interés general, que forma parte de la agenda social y política general, comprendiendo aspectos como la preservación de los paisajes, los equilibrios de la biodiversidad, la seguridad de los abastecimientos alimentarios en todo tipo de condiciones, la salud de las personas, etc, etc.

Por eso, es importante el papel a desempeñar por los poderes públicos en la reducción de los posibles desequilibrios en la cadena alimentaria. A través de las políticas públicas se garantiza mediante programas de ayudas directas una parte de la renta de los agricultores, por considerar que son el eslabón más débil, reconociéndoles además su importancia estratégica en la producción de alimentos, en la preservación del medio natural y en el desarrollo de los territorios rurales. Eso es lo que hace la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea y los gobiernos nacionales cuando la aplican en sus respectivos países.

Mediante programas de apoyo a la modernización de las explotaciones agrarias, la PAC también promueve el desarrollo de modelos más eficientes de producción que, respetando el equilibrio de los ecosistemas, transformen los recursos naturales (suelo, agua, nutrientes...) en productos agrícolas y ganaderos. Asimismo, impulsa la organización de canales de comercialización que permitan la puesta de estos productos en los mercados y finalmente en la mesa del consumidor.

Lejos de la imagen, ya tópica, de un sector agroalimentario disperso y atomizado en una miríada de miles de explotaciones y pequeños comercios, la

realidad nos dice que este sector quizá sea uno de los más organizados de nuestra economía. El millón de explotaciones suele estar integrado en una amplia red de cooperativas presente en todo el territorio rural, y muchos de sus titulares suelen estar afiliados a un sindicato agrario (OPA) o a una asociación de tipo sectorial (porcino, vacuno de carne, huevos...), o bien formar parte de alguna denominación de origen (vino, aceite de oliva...). En algunas cadenas alimentarias, el grado de vertebración alcanza niveles muy elevados

mediante la constitución de estructuras interprofesionales, que, en un modelo encomiable de concertación de intereses, integran los sectores de la producción, la industria y la distribución.

Es un hecho que los temas relacionados con la producción de alimentos han traspasado los límites del propio sector para convertirse en un asunto de interés general, formando ya parte importante de la agenda social y política de nuestro país. Sus retos no son sólo de los agricultores, sino de toda la sociedad.

La rentabilidad de su actividad profesional; la mejora de la organización cooperativa; la renovación generacional y la instalación de jóvenes; el reconocimiento del trabajo de la mujer; la digitalización; la mitigación de los efectos del cambio climático; la eficiencia energética, la transición ecológica y el bienestar animal en el marco del Pacto Verde Europeo; la calidad y salubridad de los alimentos; el papel de la agricultura familiar en la lucha contra la despoblación rural; las condiciones laborales de los temporeros agrícolas..., son asuntos que nos atañen a todos los ciudadanos españoles.

Y nos atañen no sólo en nuestra condición de consumidores de alimentos (de ahí la noción de "ciudadanía alimentaria"), sino también en tanto que personas preocupadas e interesadas por la preservación de los paisajes y por la conservación de nuestros espacios naturales y la biodiversidad.

Para abordar estos temas colaboran en este número de *Temas* varios expertos que, con textos breves y estilo divulgativo, acercan al lector a algunas de las cuestiones que conciernen al sector agroalimentario. No es, ni puede ser, nuestro objetivo abordar todos los desafíos que tiene por delante el sector, sino ofrecer algunas ideas y análisis que permitan comprender mejor una realidad compleja y apasionante. **TEMAS**